EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Quito, 11 de febrero de 2021; a las 12:49h.
VISTOS:

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO: MOT-1074-SNCD-2019-JH (22001-2019-0014-S).

FECHA DE INICIO DEL EXPEDIENTE: 3 de septiembre de 2019 (fs. 86 a 88).

FECHA DE INGRESO A LA SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DISCIPLINARIO: 9 de diciembre de 2019 (fs. 2 del cuaderno de instancia).

1. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

1.1 Accionante

Abogado Diego Alberto Goyes Prado, Director Provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura.

1.2 Servidores judiciales sumariados

Doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar y abogado Diego Francisco León Rojas, por sus actuaciones como Agente Fiscal del cantón Francisco de Orellana (Adolescentes Infractores) y Secretario de la Fiscalía de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana, respectivamente.

2. ANTECEDENTES

Mediante Oficio “2201-2018-00155-OFICIO-00239-2019” de 5 de julio de 2019, la abogada Malena Orejuela Romero, Secretaria de la Sala Única de la Corte Provincial de Orellana, puso en conocimiento del abogado Diego Alberto Goyes Prado, Director Provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura, que dentro de la casusa de adolescente infractor (violación) signado con el número 22201-2018-00155, el 27 de junio de 2019, se dictó la siguiente resolución: “[...] Una vez escuchada la fundamentación del recurso de apelación por parte del Señor Representante de la Fiscalía General del Estado y las alegaciones del Señor Defensor Público en representación del Adolescente sospechoso LFAM con fundamento en el principio procesal de contradicción y revisado el recaudo procesal, este Tribunal llega a establecer lo siguiente: 7.1.- A criterio del Jurista Ecuatoriano Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, ‘El ejercicio del poder punitivo estatal tiene límites temporales, que deben ser celosamente respetados para consolidar la vigencia plena de un Estado de Derecho’, en este orden el Art. 16, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal contienen: ‘Ámbito temporal de aplicación.- Los sujetos del proceso penal y las o los juzgadores observarán las siguientes reglas:... ..1. Toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión... 2. Se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o dictarse sentencia.’; y, según se desprende de la relación circunstanciada de la infracción constante en la denuncia No 22010181411005 presentada el 4 de noviembre de 2014 por la señora [...] en la Fiscalía del Cantón Francisco de Orellana, por los presuntos hechos (violación a la adolescente GLCHA) que tuvieron lugar el 28 de septiembre de 2014, a las 15h00; en tanto que de fojas 101, se aprecia la solicitud fiscal de formulación de cargos con fecha 21 de marzo de 2018, misma que se realiza el 13 de abril del mismo año, en la que la Jueza A-quo emite auto declarando la prescripción del ejercicio de la acción penal; 7.2.- El Art. 334-a del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia establece: ‘Prescripciones. El ejercicio de la acción en los

*casos de delitos prescribirá en tres años y las contravenciones en treinta días desde su cometimiento.’; en la especie, al haberse perpetrado la presunta infracción el 28 de septiembre de 2014, y no darse inicio a la instrucción fiscal dentro de los tres años posteriores, acorde a la precitada norma y a la sentencia emitida dentro del Juicio 277-2016 por la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, de 16 de Octubre de 2016, las 15h44, debido a la inacción de los señores Agentes Fiscales que no accionaron a tiempo el inicio de la instrucción fiscal, se considera que ha operado la prescripción del ejercicio de la acción penal, por cuanto la prescripción de la acción penal es la sanción que se le impone al Estado porque fue incapaz de agotar el ejercicio de la facultada punitiva dentro del término previamente establecido en la ley. Por lo expuesto, la Sala Única de la corte Provincial de Justicia de Orellana con fundamento en el Art. 654, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, en mérito de los autos **RESUELVE** desechar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía; consiguientemente se confirma el auto de declaratoria de prescripción del ejercicio de la acción penal. Hágase conocer al Señor Director Provincial de Consejo de la Judicatura de Orellana, la falta de acción que permitió la prescripción de la acción, generando la impunidad de un delito sexual denunciado en perjuicio de una adolescente...”.*

En tal virtud, se dio inicio a una investigación la misma que culminó con el informe motivado emitido el 12 de agosto de 2019, por el abogado Manuel Quezada Valle, Responsable de la Coordinación Provincial de Control Disciplinario de Orellana del Consejo de la Judicatura, quien señaló: “[...] Respecto del Ab. Diego Francisco León Rojas se evidencia que ocupa el cargo de secretario de la Fiscalía de Adolescentes Infractores de Orellana a partir del 6 de abril de 2015, y en calidad de secretario suscribe los impulsos fiscales de fecha 29 de marzo de 2017, 21 de septiembre de 2017, 01 de diciembre de 2017, 24 de enero de 2018, 08 de marzo de 2018 y 21 de marzo de 2018, es decir el Expediente fiscal No. 220101814110005, (causa No. 22201-2018-00155) estuvo en su conocimiento desde el mes de abril de 2015, y recién dicha causa se realiza el segundo o siguiente impulso fiscal con fecha 29 de marzo de 2017, un año once meses aproximadamente, siendo el servidor en calidad de secretario que tuvo en su despacho el mayor tiempo la cusa referida. Además se debe agregar que se ha solicitado la versión del mencionado servidor por dos oportunidades sin embargo no ha comparecido a rendir su versión libre y voluntaria pese a estar debidamente notificado conforme consta de las razones sentadas por la secretaria del despacho (fs. 35 y 76), además se le ha solicitado o requerido presentar un informe del expediente fiscal No. 220101814110005, pero se ha negado a informar al respecto (fs. 55), aduciendo que no debe informar ni remitir documentación alguna por cuanto no es de su competencia, se debe hacer notar que como secretario del despacho debe y debió cumplir estrictamente con la ‘Directriz respecto del distributivo de las Atribuciones de los Secretarios de Fiscalía’, y ‘Manual de Procedimiento, Control y organización de Expedientes’, siendo corresponsable conjuntamente con el Fiscal y Asistente del despacho y custodia de los expedientes a su cargo, por lo que presuntamente no ha cumplido con las funciones inherentes a su cargo. [...] Con los antecedentes expuestos se puede colegir que las actuaciones, principalmente del Dr. Raúl Ernesto Chimarro Lamar en calidad de Agente Fiscal, de la Fiscalía de Adolescentes Infractores del Cantón Francisco de Orellana en la sustanciación del Expediente fiscal No. 220101814110005, (causa No. 22201-2018-00155), por delito violación, presuntamente han actuado violentando los derechos constitucionales de las partes procesales, en especial de la víctima (tutela judicial efectiva), permitiendo con sus inacciones que el mencionado delito quede en la impunidad, conforme lo expuesto en el presente informe. Se debe tomar en cuenta que si éste derecho no fuera un derecho universal tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo, el ordenamiento jurídico del Estado no podría ser un sistema completo y por lo tanto el Estado no podría pretender la posibilidad del monopolio de la

coacción física legítima; como consecuencia de la omisión que presuntamente ha incurrido el investigado también ha contribuido para que se dé la violación de este derecho constitucional, al actuar presuntamente con manifiesta negligencia, que según resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura es: “Aquel descuido o falta de cuidado”, negligencia que se manifiesta cuando los servidores judiciales ya sean jueces fiscales y otros operadores de justicia, por inacción o por acciones colmadas de desidia, se separan considerablemente de una acción diligente, consagrada en una norma legítima que establezca mínimos básicos de diligencia exigibles en razón de su cargo”, en razón de la complejidad de lo prescrito, el Investigado no lo ha hecho, demostrando una absoluta falta de interés, y de Inobservancia a su deberes y responsabilidades en el desempeño de sus funciones, POR LO QUE ES RESPONSABILIDAD (sic) DIRECTA LA ACCION (sic) NEGLIGENTE REALIZADA COMO SERVIDOR (A) JUDICIAL. [...], con todo lo expuesto en el presente informe, presuntamente existiría el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas en los Arts. Art. (sic) 108, numeral 8 y Art 109 numeral 7, del Código Orgánico de Función Judicial, incumpliendo además las disposiciones tales como lo determina el Art. 100 del Código Orgánico de la Función Judicial en lo relacionado a los deberes que deben cumplir las servidoras y servidores de la Función Judicial: ‘1. Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos; 2.- Ejecutar personalmente las funciones de su puesto con honestidad, diligencia, celeridad, eficiencia, lealtad e imparcialidad; y, 5.-Ejercer con responsabilidad la autoridad de la que éste investido y velar por la ejecución de las órdenes que haya impartido; además del numeral 3 Art. 103, Ibídem, que prevé. [...] Retardar o denegar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que esté obligado’, en concordancia a lo dispuesto en el inciso segundo el Art. 172 de la Constitución de la República del Ecuador que reza: ‘...Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia...’, en consecuencia según el inciso primero del Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador que prevé: ‘...Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativamente...’ Por lo expuesto, al existir elementos sobre el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria antes mencionada emito el informe motivado para su conocimiento. Salvo su mejor e ilustrado criterio.”.

En atención a lo antes narrado, el abogado Diego Alberto Goyes Prado, Director Provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura, mediante auto de 3 de septiembre de 2019, decretó la apertura del sumario disciplinario de oficio en contra del doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar y abogado Diego Francisco León Rojas, por sus actuaciones como Agente Fiscal y secretario de la Fiscalía de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana respectivamente, “...por presumirse que la conducta del servidor judicial, Ab Diego Francisco León Rojas, estaría inmersa en la infracción disciplinaria prevista en el Art. 108, numeral 8, del Código Orgánico de Función Judicial, y la conducta del ex servidor judicial Dr. Raúl Ernesto Chimarro Lamar, presuntamente se encontraría inmersa en la infracción disciplinaria establecida en los Arts. 108, Numeral 8 y Art 109 numeral 7, del Código Orgánico de Función Judicial’, por violación a la tutela judicial efectiva de los derechos de las partes en especial de la víctima y manifiesta negligencia respectivamente.”, una vez concluida la sustanciación del mismo, mediante informe motivado de 29 de noviembre de 2019, el magister Diego Goyes Prado, Director Provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura, sugirió que al doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar, se le sancione acorde a lo establecido en el

artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de Función Judicial; y, respecto al abogado Diego Francisco León Rojas, se le sancione acorde a lo establecido en el artículo 108 numeral 8 ibíd., motivo por el cual mediante Memorando DP22-CPCD-2019-0130-M, de 4 de diciembre de 2019 fue remitido el expediente a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura e ingresado el 9 de diciembre de 2019.

3. ANÁLISIS DE FORMA

3.1 Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 178, y los numerales 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 254, y los numerales 4 y 14 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, al que le corresponde velar por la transparencia y eficiencia de los órganos que la componen.

Esta potestad constitucional y legal faculta al Consejo de la Judicatura para ejercer el control disciplinario respecto de las servidoras y los servidores de la Función Judicial, de acuerdo con los principios y reglas establecidas en el Capítulo VII del Título II del Código Orgánico de la Función Judicial.

El primer inciso del artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio por la Directora o el Director Provincial, o por la unidad que el Consejo de la Judicatura establezca de manera general, cuando llegare a su conocimiento información confiable de que el servidor de la Función Judicial ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria.

En el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece como garantías básicas del derecho al debido proceso: *“1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. [...] 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.”* (Subrayado fuera del texto original).

Bajo este contexto, en Sentencia 3-19-CN/20, de 29 de julio de 2020, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, se declaró la inconstitucionalidad de la actuación de oficio del Consejo de la Judicatura prevista en el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, exclusivamente para la aplicación del artículo 109 numeral 7 ibíd, por cuanto a criterio del máximo órgano de control constitucional la actuación de oficio del Consejo de la Judicatura por dicha infracción disciplinaria: *“[...] atenta al principio constitucional de independencia judicial, [...] interna, al permitir una indebida injerencia en las causas de un órgano de gestión y administrativo sobre actuaciones jurisdiccionales. Esta injerencia supone, a su vez, un inaceptable condicionamiento a las actuaciones judiciales de jueces y juezas, fiscales y defensores públicos, lo cual no solo viola el derecho a un juez independiente, sino que pone en grave riesgo a los derechos que los jueces y juezas deben tutelar [...]”*.

Asimismo el 18 de noviembre de 2020, la Corte Nacional de Justicia emitió la Resolución 13-2020, *“QUE ACLARA EL PROCEDIMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LAS SOLICITUDES DE DECLARACIÓN JURISDICCIONAL PREVIA REMITIDAS EN EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS INICIADOS DE OFICIO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.”*; en cuyo artículo 1, resolvió lo siguiente: *“Art. 1.- A continuación del artículo 4 de la Resolución No. 12-2020 de 21 de septiembre de 2020, agréguese el siguiente artículo: ‘Art. 4A.- La o el Presidente de la Corte Nacional de Justicia y las o los Presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia inadmitirán liminarmente las peticiones de declaración jurisdiccional previa remitidas por el Consejo de la Judicatura dentro de los expedientes disciplinarios iniciados de oficio por las infracciones contenidas en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, por falta de competencia del órgano administrativo. Asimismo, por falta de competencia del órgano jurisdiccional, se inadmitirán liminarmente las solicitudes de declaración jurisdiccional previa presentadas dentro de expedientes disciplinarios que se sustenten en infracciones distintas a las previstas en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial (...)”*, lo que conllevó a que mediante Resolución de 11 de diciembre de 2020, el Presidente de la Corte Provincial de Justicia de Orellana, inadmita la solicitud de declaratoria jurisdiccional previa efectuada por el doctor Guido Quezada Minga, Subdirector Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura el 16 de octubre de 2020.

Por lo tanto, el Pleno del Consejo de la Judicatura no realizará ningún análisis respecto a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, la cual es objeto de este sumario disciplinario por lo que este órgano únicamente se pronunciará respecto a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme así se lo declara.

3.2 Validez del procedimiento administrativo

El numeral 1 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

En cumplimiento de dicha disposición se advierte, que los servidores sumariados fueron citados en legal y debida forma con el auto de inicio del presente sumario, conforme se desprende de las razones de citación realizadas los días 3 y 4 de septiembre de 2019, por la abogada Adela Guerra, Secretaria ad hoc [fs. 89 vta. y 90].

Asimismo, se ha concedido a los servidores sumariados el tiempo suficiente para que puedan preparar su defensa, ejercerla de manera efectiva, presentar las pruebas de descargo y contradecir las presentadas en su contra; en definitiva, se han respetado todas y cada una de las garantías del debido proceso reconocidas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, bajo el título de derechos de protección; por lo tanto, al no haberse incurrido en violación de ninguna solemnidad, se declara la validez del presente sumario administrativo.

3.3 Legitimación activa

El artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone que la acción disciplinaria se ejercerá de oficio, o por queja o denuncia.

El artículo 114 del cuerpo legal invocado señala que los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio por la Directora o el Director Provincial, cuando llegare a su conocimiento información confiable de que el servidor judicial ha incurrido en una presunta infracción disciplinaria sancionada por este código.

Asimismo, el literal b) del artículo 11 de del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, prevé que corresponde a las Directoras o a los Directores Provinciales iniciar de oficio los sumarios disciplinarios, cuando llegare a su conocimiento información confiable que haga presumir el cometimiento de una infracción disciplinaria.

El presente sumario disciplinario, fue iniciado de oficio el 3 de septiembre de 2019, por el abogado Diego Alberto Goyes Prado, Director Provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura, con base en la información confiable que llegó a su conocimiento mediante informe motivado de investigación de 12 de agosto de 2019 suscrito por el abogado Manuel Quezada Valle, Responsable de la Coordinación Provincial de Control Disciplinario de Orellana del Consejo de la Judicatura; en consecuencia cuenta con legitimación suficiente para iniciar la acción disciplinaria, conforme así se lo declara.

4. TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN MOTIVO DEL SUMARIO

En el auto de apertura del presente sumario disciplinario de 3 de septiembre de 2019, el abogado Diego Alberto Goyes Prado, Director Provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura consideró que el abogado Diego Francisco León Rojas, incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108 numeral 8¹, del Código Orgánico de Función Judicial, y que el doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar, incurrió en las infracciones disciplinarias establecidas en los artículos 108 numeral 8 y 109 numeral 7², ibíd.; no obstante de aquello como se manifestó anteriormente en el punto 3.1 de la presente resolución en el presente sumario disciplinario únicamente se procederá al análisis respecto de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial.

5. OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN

El numeral 2 del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que la acción disciplinaria prescribe, por infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de remuneración, en el plazo de sesenta días.

Asimismo, los incisos segundo y tercero del artículo 106 ibíd., establecen que los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán en el caso de acciones de oficio desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora. La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año. Vencido este plazo, la acción prescribirá definitivamente.

¹ Ref. Artículo 108.- Infracciones graves.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le podrá imponer sanción de suspensión, por las siguientes infracciones: [...] 8. No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República.

² Artículo. 109.- Infracciones gravísimas. A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: [...] 7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable;

En el presente caso, la información confiable sobre el presunto cometimiento de la falta disciplinaria llegó a conocimiento del Director Provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura el 12 de agosto de 2019, con base en lo cual se dictó el auto de inicio del sumario el 3 de septiembre del mismo año; en el que se ha tipificado las presuntas actuaciones de los servidores judiciales sumariados en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, que prevé la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración; por lo que, se declara que la acción se ejerció dentro del plazo establecido en el artículo 106 del cuerpo legal antes mencionado.

Es importante señalar que el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 030-2020, en su artículo 1, resolvió suspender los plazos y términos que se encuentran decurriendo en los procedimientos disciplinarios que son sustanciados por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y en las Direcciones Provinciales, a partir del 17 de marzo de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Decreto Ejecutivo 1017, expedido por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador el 16 de marzo de 2020, mediante el cual se declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional ante la declaratoria de pandemia de SARS-COV-2, por parte de la Organización Mundial de la Salud; y, en ese sentido, se dispuso a todas las Funciones del Estado la emisión de las resoluciones necesarias para que proceda la suspensión de los términos y plazos a los que haya lugar, en procesos judiciales y administrativos. Posteriormente, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 058-2020, vigente desde el 8 de junio de 2020, dispuso derogar la Resolución 030-2020.

El 21 de julio de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura, emitió la Resolución 081-2020, en cuyo artículo 1, resolvió lo siguiente: *“Suspensión de plazos y términos para la sustanciación y resolución de procedimientos disciplinarios.- Suspender los plazos y términos que se encuentran decurriendo en los procedimientos disciplinarios del Consejo de la Judicatura que son sustanciados por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y por las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, a nivel nacional (...)*”.

El Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 108-2020, vigente desde el 12 de octubre de 2020, derogó la suspensión de términos y plazos dispuesta mediante la resolución citada en el párrafo anterior, por lo tanto este órgano colegiado continúa con el trámite del presente expediente disciplinario.

En ese contexto, al haberse iniciado el presente sumario administrativo el 3 de septiembre de 2019, y suspendido los plazos de prescripción de la acción desde el 17 de marzo hasta el 7 de junio de 2020, y nuevamente desde el 22 de julio de 2020, hasta el 11 de octubre de 2020, se determina que hasta la fecha de emisión de la presente resolución no ha transcurrido el plazo de un año para que la acción prescriba definitivamente, por lo que la potestad disciplinaria y sancionatoria se ha ejercido de manera oportuna, conforme así se lo declara.

6. ANÁLISIS DE FONDO

6.1 Argumentos del magíster Diego Goyes Prado, Director Provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura (fs. 276 a 289)

Que se observa que dentro del expediente fiscal 220101814110005, la solicitud de formulación de cargos no fue realizada dentro de 4 años aproximadamente, correspondiendo dos años y 11 meses

y 12 días, al hoy sumariado doctor Raúl Chimarro Lamar, inobservando de esta forma el artículo 315 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prevé: *“Los jueces, fiscales de adolescentes infractores, defensores públicos o privados y la Oficina Técnica de la Administración de Justicia deben impulsar con celeridad las actuaciones judiciales. Quienes retarden indebidamente el proceso seguido contra un adolescente, serán sancionados en la forma prevista en este Código, sin perjuicio de las penas contempladas en otras leyes.”*; en tal virtud, dichas actuaciones implicarían una clara violación al principio de la Tutela Judicial efectiva previsto en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador.

Que se debe tomar en cuenta que si éste derecho no fuera un derecho universal tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo, el ordenamiento jurídico del Estado no podría ser un sistema completo y por lo tanto el Estado no podría pretender la posibilidad del monopolio de la coacción física legítima. Es importante saber que cualquier problema o asunto que se plantee en la sociedad se encuentra resuelto en el ordenamiento jurídico a través de una norma y se garantiza a través de la acción del poder judicial. Es importante hacer un análisis con respecto al significado y la importancia y obligatoriedad del acceso al principio Constitucional como es la Tutela Judicial Efectiva, que viene a ser un derecho de protección fundamental que supone una garantizada posibilidad de acceso a la jurisdicción, tiene relación con el derecho de acción; sin embargo reclama mucho más puesto que hace referencia a unas garantías mínimas de eficacia y como su nombre lo indica lo que se requiere es que dicha tutela judicial sea efectiva. *“La Tutela Judicial Efectiva es la titularidad y ámbito material: Al referirnos a la titularidad de la tutela judicial efectiva hacemos alusión a que es un derecho fundamental que todos los ciudadanos tenemos y que se encuentra claramente establecido en el ordenamiento jurídico, se trata del derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses, impidiendo que se produzca en ningún caso la indefensión. Se debe tener en claro que nadie puede verse excluido del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, sea persona física o persona jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjero. Si éste derecho no fuera un derecho universal tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo, el ordenamiento jurídico del Estado no podría ser un sistema completo y por lo tanto el Estado no podría pretender la posibilidad del monopolio de la coacción física legítima.”*. Por lo tanto, el derecho a la tutela judicial efectiva puede entenderse como un derecho de prestación que exige que el Estado cree los instrumentos suficientes para que el derecho pueda ser ejercido y la administración de justicia prestada. Viene a ser un derecho constitucional pero de configuración legal, es decir que puede aplicarse y ejercerse únicamente de conformidad a la ley.

Que en consideración de lo expuesto queda de manifiesto una clara violación a las garantías que rigen el proceso, de manera especial a la Tutela Judicial Efectiva, como consecuencia de la omisión en el despacho oportuno y la falta de celeridad en la tramitación de la causa, por parte del doctor Raúl Chimarro Lamar, Agente Fiscal de Adolescentes Infractores de Orellana, como consecuencia de la omisión que presuntamente ha incurrido el sumariado también ha contribuido para que se dé la violación de este derecho constitucional, además de permitir la prescripción de un delito de violación a una menor de edad quedando el delito en la impunidad, por responsabilidad del sumariado, por lo que presuntamente estaría incurriendo en manifiesta negligencia, que según resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura es: *“Aquel descuido o falta de cuidado”*, negligencia que se manifiesta cuando los servidores judiciales ya sean jueces, fiscales y otros operadores de justicia, por inacción o por acciones colmadas de desidia, se separan considerablemente de una acción diligente, consagrada en una norma legítima que establezca mínimos básicos de diligencia exigibles en razón de su cargo, *“...en razón de la complejidad de lo*

prescrito, el Investigado no lo ha hecho, demostrando una absoluta falta de interés, y de inobservancia a su deberes y responsabilidades en el desempeño de sus funciones, POR LO QUE ES RESPONSABILIDAD (sic) DIRECTA LA ACCION (sic) NEGLIGENTE REALIZADA COMO SERVIDOR (A) JUDICIAL.”. Es así como en la aplicación al principio de responsabilidad Administrativa de los servidores Públicos la conducta del servidor judicial doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar, presuntamente se encontraría inmersa en las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en los artículos 108 numeral 8 y 109 numeral 7 del Código Orgánico de Función Judicial.

Que en lo referente al abogado Diego Francisco León Rojas, se puede evidenciar que ocupa el cargo de Secretario de la Fiscalía de Adolescentes Infractores de Orellana a partir del 6 de abril de 2015, y en calidad de secretario suscribe los impulsos fiscales de 29 de marzo de 2017; 21 de septiembre de 2017; 1 de diciembre de 2017; 24 de enero de 2018; 8 de marzo de 2018; y, 21 de marzo de 2018; es decir, el expediente fiscal 220101814110005, (causa penal 22201-2018-00155), estuvo en su conocimiento y despacho desde el mes de abril de 2015, y recién dicha causa se realiza el segundo o siguiente impulso fiscal con fecha 29 de marzo de 2017, un año once meses y 23 días aproximadamente, siendo el servidor en calidad de secretario que tuvo en su despacho el mayor tiempo la cusa referida, teniendo la responsabilidad directa del despacho, conforme lo manifiesta el ex Agente Fiscal doctor Raúl Chimarro Lamar, en su versión, quien al ser preguntado respondió: “[...] 3.- *¿Indique el versionista si usted en calidad de Agente Fiscal, se encontraba a cargo de sustanciar el Expediente fiscal No. 220101814110005, por delito de violación? Rspta. Sí, y ordenaba a los secretarios ya sean titulares o encargados en primer lugar que todos los días revisen y despachen en primer lugar los delitos sexuales que se encontraban en el escritorio del secretario, puesto que el secretario era encargado del custodio del expediente fiscal. 4.- ¿Diga el versionista el nombre del servidor que puso en su conocimiento el Expediente fiscal No. 220101814110005, por delito de violación? Rspta. La Ab. Shirley Suqui Yauripoma el 6 de noviembre de 2014, y se le entregó inmediatamente al secretario titular para que despache y realice todas diligencias necesarias en este proceso y el secretario era el Ab. Diego Francios León Rojas, como custodio del expediente. 5.- ¿Diga el versionista el nombre del servidor, secretario y/o asistente, que se encontraba a cargo del Expediente fiscal No. 220101814110005, por delito de violación? Rspta. Diego Francisco León Rojas como secretario Titular de la Fiscalía de Adolescentes Infractores de Orellana. (...) 7.- Indique el versionista si conoce los motivos por los cuales no se despachó de forma oportuna Expediente fiscal No. 220101814110005, (causa No. 22201-2018-00155), por delito de violación? Rspta. Al entregar el expediente fiscal No. 220101814110005, Inmediatamente al secretario Diego Francisco León Rojas este retardó sin tener yo conocimiento de cual fuese el motivo...*”, de esta forma se debe hacer notar que como secretario del despacho debió cumplir estrictamente con la “*Directriz respecto del distributivo de las Atribuciones de los Secretarios de Fiscalía*”, y “*Manual de Procedimiento, Control y Organización de Expedientes*”, siendo corresponsable conjuntamente con el Fiscal y Asistente del despacho y custodia de los expedientes a su cargo, lo cual de lo expuesto anteriormente no lo ha hecho, por lo que presuntamente ha incumplido con las funciones inherentes a su cargo.

Que vale resaltar que el hecho de que en un proceso de gran magnitud como es el caso de violación a una menor de edad, se produzcan este tipo de inconsistencias y omisiones, dejadez desinterés, etc., por parte del secretario de Fiscales, implica una clara violación al principio de Tutela Judicial efectiva contenido en el artículo 75 de la Constitución de la República. Al respecto se debe tomar en cuenta que si éste derecho no fuera universal tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo, el ordenamiento jurídico del Estado no podría ser un sistema completo y por lo tanto el

Estado no podría pretender la posibilidad del monopolio de la coacción física legítima. Es importante saber que cualquier problema o asunto que se plantee en la sociedad se encuentra respuesta en el ordenamiento jurídico a través de una norma y se garantiza a través de la acción del poder judicial.

Que en la aplicación al principio de responsabilidad Administrativa de los servidores Públicos la conducta del servidor judicial Diego Francisco León Rojas, presuntamente se encontraría inmersa en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de Función Judicial.

Que con su actuar los servidores sumariados han incumplido lo determinado en el artículo 227 de la Carta Magna que refiere: *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”*. Los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, disponen que son deberes de todo servidor judicial: *“Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos”, y, “ejecutar personalmente las funciones de su puesto con honestidad, diligencia, celeridad, eficiencia, lealtad e imparcialidad.”*, y cuyo numeral 5 que dispone que es deber de todo funcionario judicial ejercer con responsabilidad la autoridad del que esta investido.

Que por lo expuesto y en apego a lo establecido en el artículo 41 inciso final de la Codificación del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, remite el informe motivado: en relación al servidor judicial, doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar, se sugiere se sancione acorde a lo establecido en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de Función Judicial, por ser la falta disciplinaria más grave, esto es la destitución; y; al servidor sumariado: abogado Diego Francisco León Rojas, sugiere se sancione acorde a lo establecido en el artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de Función Judicial, por ser la falta disciplinaria más grave, esto es la suspensión.

6.2 Argumentos del servidor judicial sumariado, doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar, por sus actuaciones como Agente Fiscal del cantón Francisco de Orellana (Adolescentes Infractores) (fs. 96 a 110)

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece qué organismo o sujetos dentro de la relación de jurisdicción procesal, podrían pronunciarse al respecto de fallos, resoluciones, decisiones, sentencias y/o actuaciones de los servidores judiciales; y dentro del presente caso en ninguna parte se calificó la incorrección de actos o se calificó el error inexcusable o la manifiesta negligencia, en tal sentido solicita que se declare la nulidad de lo actuado y retrotraiga lo actuado a fin de que se disponga el archivo por falta de competencia.

Que en el presente sumario se ha cometido una flagrante violación a su derecho a la defensa y al debido proceso siendo que se procedió erráticamente por parte del Consejo de la Judicatura a notificar en un correo electrónico y no en persona; ya que la figura que se aplica para conocer el contenido de inicio de un sumario es la citación en persona, por lo que alega la nulidad del proceso 2201-2019-0014S, en virtud de la inconsistencia de la acción citatoria.

Que pese a ser obligación de la administración sancionatoria prevenir un adecuado derecho a la defensa y en lo posterior un acto administrativo con efectos jurídicos individuales hace caso omiso a sus propios pronunciamientos.

Que debido a las competencias y atribuciones entre él y el otro funcionario sumariado alega que el presente sumario debe ser manejado de forma individualizada, en torno a las responsabilidades y actuaciones conforme el derecho lo prevé.

Que el sumario disciplinario tiene como antecedente el informe motivado de investigación 2019-0026-O-DPCJO, en el cual no existen agregadas copias del expediente fiscal, por lo tanto en el proceso no ha existido profundidad en la investigación sino solamente una relación de fechas y reportes de Talento Humano en el tiempo, por lo que alega la nulidad de lo investigado.

Que en el auto de inicio del sumario no constan los nombres de las personas que sustanciaban el expediente, por lo que al no haberse hecho constar en el decreto de inicio del sumario todos los hechos circundantes bajo el mandato del artículo 76 en sus numerales 1, 2, 3, 6 y 7 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 116 del Código Orgánico de la Función Judicial solicita la nulidad constitucional de todo lo actuado.

Que el auto de apertura del sumario no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 33 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, lo cual esta omisión acarrea una nulidad dentro de la causa.

Que alega la inexistencia del informe de análisis técnico jurídico que debe existir por parte de la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal, conforme obra del marco de competencia emitido en el numeral 1.2.1.3 del Estatuto Orgánico por Procesos de la Fiscalía General del Estado que prevé: “[...] *Evaluar la actuación técnico-jurídica y la aplicación normativa de los fiscales durante la investigación preprocesal procesal penal y de los actos administrativos [...] 11. Informar al Consejo de la Judicatura los resultados de la evaluación técnico-jurídica y la aplicación normativa de los fiscales durante la investigación preprocesal procesal penal y de los actos administrativos en los casos que se presuma el cometimiento de una falta disciplinaria.*”.

Que al momento en el que se encontraba a cargo de la Fiscalía de la que fue separado en octubre de 2017 el expediente Fiscal 220101814110005, se encontraba dentro de los plazos previstos en el Código Orgánico Integral Penal y Código de la Niñez y Adolescencia “Prescripciones. El ejercicio de la acción en los casos de delitos prescribirá en tres años y las contravenciones en treinta días desde su cometimiento. Las medidas socioeducativas prescribirán en el mismo tiempo de su imposición. En ningún caso será menor de seis meses desde el día en que se ejecutorió la sentencia”, en tal razón la persona que se encontraba obligada a exponer al nuevo Fiscal eran los funcionarios que quedaron a cargo del expediente esto es Asistente de Fiscalía y el Secretario o Secretaria; por lo tanto lo único que operaría en el presente sumario es la aplicación del artículo 127 del Código Orgánico de la Función Judicial: “*Responsabilidad por demora.- Las secretarías y secretarios y demás servidoras y servidores judiciales que demoraren de forma injustificada o negligente poner al despacho los expedientes de su oficina, o hacer la entrega que se les hubiere ordenado, serán destituidos.*”.

Que su gestión duró hasta octubre de 2017, mientras que la prescripción fue declarada el 1 de marzo de 2019; por lo tanto, aplicando taxativamente la norma se trataría de una infracción leve, por lo expuesto los hechos referidos no se ajustan a las infracciones presumibles de sanción, tanto en la esfera de la competencia para sancionarlos como en la configuración típica.

6.3 Argumentos del servidor judicial sumariado, abogado Diego Francisco León Rojas, por sus actuaciones como Secretario de la Fiscalía de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana (fs. 115 a 121)

Que el Fiscal es el único con potestad de ejercer los “...*aspectos jurisdiccionales o la investigación preprocesal procesal penal y jerárquicamente es quien dispone o direcciona la investigación realizando impulsos dentro del plan investigativo, por lo tanto es quien debe reunir los elementos suficientes de convicción para ponerlos a disposición del juez de garantías penales.*”.

Que el secretario de Fiscalía, desempeña un trabajo eminentemente administrativo, se lo considera como personal de apoyo del Fiscal.

Que en calidad de secretario recibe disposiciones del Fiscal, quien traza lineamientos y lleva a cabo la investigación; “...*mi deber entre los más relevantes, ser responsable del buen manejo y cuidado de expedientes; ser custodio de expedientes; dar fe de las actuaciones del Fiscal; notificar a los sujetos procesales, llevar ordenadamente la foliatura de los expedientes, entre otros.*”.

Que la supuesta acción susceptible de sanción, está prescrita conforme lo establece el artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuando establece que la acción disciplinaria prescribe por infracciones susceptibles de sanción pecuniaria o de amonestación en el plazo de treinta días; por infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de remuneración en el plazo de sesenta días; y, por las infracciones susceptibles de destitución en el plazo de un año, salvo las que estuvieren vinculadas con un delito que prescribirán en cinco años, sin perjuicio del régimen de prescripción de la acción disciplinaria se contarán, en el caso de queja o denuncia desde que se cometió la infracción; y en el caso de acciones de oficio, desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora, dejando en claro que la iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por un año; y , que vencido este plazo la acción disciplinaria prescribe definitivamente.

Que en su calidad de Secretario de Fiscalía, se posesionó del cargo y entró en funciones el 6 de abril de 2015, es decir cinco meses después de aperturada la investigación.

Que como Secretario, no está entre sus competencias fundamentar un acto administrativo, cuando sus funciones son otras y están debidamente enmarcadas.

Que no ha violado ninguno de los derechos y garantías constitucionales como se establece en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador, en desmedro de una persona, hecho o causa.

Que no existe norma, reglamento o disposición expresa para sancionar “*tipificadamente*” la incurrancia en una inobservancia, infracción u omisión cometida por el servidor público, y con ello haber actuado al margen de lo aceptable o determinado como impropio, en la actuación del Secretario de Fiscalía por lo que se acoge a lo que dispone el artículo 5 del Código Orgánico Integral

Penal, en su Principio de Legalidad; pues tal como manifiesta el referido cuerpo legal, no hay infracción penal, ni pena, tampoco proceso penal sin ley existente al momento de cometida la infracción.

Que, solicita se lo declare exento de responsabilidad, en relación a la presunta infracción que se le imputa y ordene el archivo del sumario administrativo iniciado en su contra.

7. HECHOS PROBADOS

7.1 A foja 248 consta la copia certificada de la acción de personal 1784-DRH-FGE, de 8 de junio de 2011, la misma que regía a partir del 10 de junio de 2011 y con la cual se nombró provisionalmente al doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar, Fiscal de Adolescentes Infractores de la Fiscalía Provincial de Orellana.

7.2 A foja 139 consta copia certificada de la denuncia presentada el 4 de noviembre de 2014, por la señora GCAC, en la que señaló que su hija fue víctima de un presunto delito sexual por parte de su primo. Como fecha del incidente consta: “2014-09-28”.

7.3 A foja 254 consta la copia certificada de la acción de personal 0388DTHFGE, de 20 de febrero de 2015, la misma que regía a partir del 1 de enero de 2015 y con la cual se otorgó el nombramiento provisional al abogado Diego Francisco León Rojas, Secretario de Fiscalía Provincial de Orellana.

7.4 A foja 247 consta la copia certificada de la acción de personal 4464DTH-FGE, de 25 de octubre de 2017, con la cual se ejecutó la sanción de destitución del doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar.

7.5 A foja 72 consta el Oficio FPO-FEAI1-1305-2018-000184-O, de 21 de marzo de 2018, suscrito por el doctor Alex Enrique Alajo Panoluisa, mediante el cual solicita se convoque a Audiencia de Formulación de Cargos dentro de la investigación previa 220101814110005, seguida por el presunto delito de violación a una menor de edad, tramitado en la Fiscalía de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana.

7.6 A foja 141 consta copia certificada de la providencia de 10 de abril de 2018, en la cual la abogada Vicenta Cumandá Cuaical Galárraga, Jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Francisco de Orellana, convocó a pedido del Fiscal a la audiencia de formulación de cargos para el 13 de abril de 2018.

7.7 De fojas 143 a 144, consta el acta resumen de la audiencia de formulación de cargos dentro del proceso 22201201800155, llevada a cabo el 13 de abril de 2018, en la cual la Jueza señaló: “ [...] *SE ACOGE LO SOLICITADO POR LA DEFENSA DEL ADOLESCENTE, YA QUE REVISADO EL EXPEDIENTE INDAGACIÓN PREVIA, LA DENUNCIA EN CONTRA DEL ADOLESCENTE, HA SIDO PRESENTADA EN FISCALÍA EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, ES DECIR HASTA LA PRESENTE HAN TRANSCURRIDO MÁS DE TRES AÑOS DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA, HASTA LA SOLICITUD DE FORMULACIÓN DE CARGOS [...]*”.

7.8 De fojas 145 a 146 consta la copia certificada del auto de prescripción de 1 de marzo de 2019, dictado por la abogada Vicenta Cumandá Cuaical Galárraga, Jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Orellana, dentro de la causa 22201-2018-00155, en el que

se dispuso: “[...] el jueves 6 de noviembre de 2014, el señor fiscal en base a lo dispuesto en los Arts. 282 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el Art. 342 del Código de la Niñez y la Adolescencia, da inicio a una investigación previa por el presunto delito de violación cometido en contra de la adolescente [...] que ha llegado a su conocimiento, asimismo se dispone la realización de diversas diligencias, lo cual obra de autos a fojas 11 del cuaderno de indagación. Posteriormente mediante acto administrativo fiscal del 29 de marzo de 2017, de las 08: 59:05, se dispone la realización de otras diligencias, entre ellas practicar el reconocimiento del lugar de los hechos, solicitando información de los certificados biométricos o datos de filiación, como obra de autos a fojas 51 del cuaderno de indagación. Consta del expediente fiscal la petición realizada por [...], en calidad de representante legal de [...] (fs.80), realizando la petición de archivo de la investigación ya que de la apertura de la misma hasta la presente fecha han transcurrido más de tres años. En la audiencia convocada para la formulación de cargos, el señor fiscal manifiesta que es obligación del a fiscalía solicitar la presente audiencia por encontrar cargos suficientes en contra del adolescente [...] y dar inicio a una instrucción fiscal por el delito de violación establecido en el Art. 171, 1 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 152 mineral (sic) 4 de mismo cuerpo legal. Los datos relevantes son el informe ginecológico, el informe de trabajo social, el testimonio anticipado de la adolescente. Acto seguido se concede la palabra a la Abogada Marcia Valladares Gutama, en calidad de defensora del ciudadano [...], la cual indica que el señor fiscal se ha referido de forma cronológica desde la fecha que se ha dado inicio a la indagación, por lo que solicita se sirva conceder la prescripción. RESOLUCION (sic): Con Los antecedentes indicados y verificado que ha sido el expediente de investigación previa se puede colegir que se dio inicio a la misma el 6 de noviembre de 2014(fs11), en la cual se puede verificar que el 7 de noviembre de 2014 a las 13h55 (fs.46) se dispuso la realización de la valoración psicológica legal por parte de la psicóloga Sonia León Sanunga, perito Acreditada por el Consejo de la Judicatura(fs. 469), posterior es retomada la investigación previa el 29 de marzo de 2017, las 08h59 (fs.51). Al respecto cabe indicar lo que dispone el Art. 342 del Código de la Niñez y Adolescencia, referente a la Investigación previa, que textualmente dice: ‘Antes de iniciar la instrucción, el fiscal podrá investigar los hechos que por cualquier medio lleguen a su conocimiento en el que se presume la participación de un adolescente. La investigación previa no excederá de cuatro meses en los delitos sancionados por pena privativa de libertad de hasta cinco años, ni de ocho meses en aquellos sancionados con pena superior a cinco años. Transcurridos los plazos señalados el fiscal, en el plazo de diez días ejercerá la acción penal o archivará la causa...’. Asimismo el Art. 334ª referente a las prescripciones dice: ‘El ejercicio de la acción en los casos de delitos prescribirá en tres años y las contravenciones en treinta días desde su cometimiento...’. El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, dice: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. En consecuencia se resuelve declarar la prescripción de esta acción, porque ha transcurrido más del tiempo establecido en el Art. 342 del Código de la Niñez y Adolescencia la investigación previa y ha transcurrido más de 3 años el ejercicio de la acción, establecido en el Art. 334ª...”.

7.9 A foja 147 consta copia certificada del escrito de 6 de marzo de 2019, presentado dentro de la causa penal 22201-2018-00155, por el doctor Alex Alajo Panoluisa, Agente Fiscal de Adolescentes Infractores, en el que interpuso recurso de apelación de la emisión del auto de resolución de prescripción de 1 de marzo de 2019.

7.10 De fojas 167 a 169, consta copia certificada de la sentencia de 27 de junio de 2019, dictada por el abogado Ángel Ernesto Morán Mejía, doctores Freddy Ramón Cisneros Espinoza y Eugenio

Édgar Rosero Aldas, Jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Orellana, dentro del expediente por delito sexual No. 22201-2018-00155, en la cual se dispone: “**SEPTIMO. (sic) RESOLUCION.-** Una vez escuchada la fundamentación del recurso de apelación por parte del Señor Representante de la Fiscalía General del Estado y las alegaciones del Señor Defensor Público en representación del Adolescente sospechoso LFAM con fundamento en el principio procesal de contradicción y revisado el recaudo procesal, este Tribunal llega a establecer lo siguiente: 7.1.- A criterio del Jurista Ecuatoriano Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, ‘El ejercicio del poder punitivo estatal tiene límites temporales, que deben ser celosamente respetados para consolidar la vigencia plena de un Estado de Derecho’, en este orden el Art. 16, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal contienen: ‘Ámbito temporal de aplicación.- Los sujetos del proceso penal y las o los juzgadores observarán las siguientes reglas:... ..1. Toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión... 2. Se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o dictarse sentencia.’; y, según se desprende de la relación circunstanciada de la infracción constante en la denuncia No 22010181411005 presentada el 4 de noviembre de 2014 por la señora [...] en la Fiscalía del Cantón Francisco de Orellana, por los presuntos hechos (violación a la adolescente GLCHA) que tuvieron lugar el 28 de septiembre de 2014, a las 15h00; en tanto que de fojas 101, se aprecia la solicitud fiscal de formulación de cargos con fecha 21 de marzo de 2018, misma que se realiza el 13 de abril del mismo año, en la que la Jueza A-quo emite auto declarando la prescripción del ejercicio de la acción penal; 7.2.- El Art. 334-a del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia establece: ‘Prescripciones. El ejercicio de la acción en los casos de delitos prescribirá en tres años y las contravenciones en treinta días desde su cometimiento.’; en la especie, al haberse perpetrado la presunta infracción el 28 de septiembre de 2014, y no darse inicio a la instrucción fiscal dentro de los tres años posteriores, acorde a la precitada norma y a la sentencia emitida dentro del Juicio 277-2016 por la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia, de 16 de Octubre de 2016, las 15h44, debido a la inacción de los señores Agentes Fiscales que no accionaron a tiempo el inicio de la instrucción fiscal, se considera que ha operado la prescripción del ejercicio de la acción penal, por cuanto la prescripción de la acción penal es la sanción que se le impone al Estado porque fue incapaz de agotar el ejercicio de la facultada punitiva dentro del término previamente establecido en la ley. Por lo expuesto, la Sala Única de la corte Provincial de Justicia de Orellana con fundamento en el Art. 654, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal, en mérito de los autos **RESUELVE** desechar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía; consiguientemente se confirma el auto de declaratoria de prescripción del ejercicio de la acción penal. Hágase conocer al Señor Director Provincial de Consejo de la Judicatura de Orellana, la falta de acción que permitió la prescripción de la acción, generando la impunidad de un delito sexual denunciado en perjuicio de una adolescente...”

7.11 A foja 15 consta el original del Oficio FPO-UAF-2019-000943-O, de 22 de julio de 2019, suscrito por el ingeniero Joan Bismark Calderón Sosa, Analista Provincial de Talento Humano, de la Fiscalía Provincial de Orellana; mediante el cual, remitió los nombres con las designaciones respectivas de los servidores que han laborado en la Fiscalía de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana, a partir del mes de noviembre del año dos mil catorce, hasta la presente fecha; dentro de los cuales constan los nombres de los hoy sumariados.

7.12 A foja 22 a 25 consta el Oficio 000124-FPO-F3-AA, de 24 de julio de 2019, suscrito por el doctor Alex Alajo Panoluiza, en el cual señaló: “Mediante acción de personal No.- 164-FPO-TH, de fecha 11-12-2017, el señor Dr. Pio Agustín (sic) Palacios Sotomayor, Fiscal Provincial de

Orellana, Subrogante, en uso de sus atribuciones, dispuso que el Dr. Alex Enrique Alajo Panoluisa, Agente Fiscal de la Fiscalía Provincial de Orellana, a mas (sic) de sus actividades asuma temporalmente el despacho del Dr. Chimarro Lamar Raul (sic) Ernesto, [...] por motivo de destitución [...] Un ves (sic) que asumí el despacho de la Fiscalía Especializada Adolescentes Infractores de la provincia de Orellana, procedí a la revisión de los expedientes que se tramitan en la fiscalía, en uso de mis atribuciones determinadas en el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 410, 411 y 444 del Código Orgánico Integral Penal, en relación al Art. 340 y 343 del Código de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de continuar con la investigación se remitió atento oficio a la sala de sorteo de la Unidad de la familia, Mujer Niñez y Adolescencia del Cantón Francisco, la petición para el señalamiento de día y hora para que se recepte el testimonio anticipado de la Victima de las iniciales CAGL, dentro del expediente Fiscal NO.- 220101814110005 [...]”.

7.13 A fojas 31 consta el Oficio FPO-GPP-2019-000971-O, de 25 de julio de 2019, suscrito por el abogado Ángel Uribe Verduga Pinargote, Analista Provincial de Gestión Procesal 2, de la Fiscalía Provincial de Orellana, en el cual indicó: “[...] una vez revisado el expediente Fiscal Nro. 220101814110005 [...] b) la Investigación previa de la Noticia del delito en mención se inició el 06 de noviembre del año 2014 a las 11h00; c) Los impulsos fiscales se realizaron según al (sic) siguiente secuencia: 1.- El 06 de noviembre del 2014, Dr. Raúl Chimarro Lamar Agente Fiscal y Ab. Shirley Suqui secretaria de fiscalía Ad-hoc. 2.- 29 de marzo del 2017, Dr. Raúl Chimarro Lamar Agente Fiscal y Ab. Diego león (sic) Rojas secretario de fiscalía; 3.- 21 de septiembre del 2017, Dr. Raúl Chimarro Lamar Agente Fiscal y Ab. Diego León Rojas secretario de fiscalía; 4.- 01 de diciembre del 2017, Ab. Vicente Aurelio Chamba Paucar Agente Fiscal y Ab. Diego león (sic) Rojas secretario de fiscalía; 5.- 24 de enero del 2018, Dra. Eulalia Rodríguez Quito Agente Fiscal y Ab. Diego león (sic) Rojas secretario de fiscalía; 6.- 08 de marzo del 2018 Dr. Alex Alajo Agente Fiscal y Ab. Diego león (sic) Rojas secretario de fiscalía; 7.- 21 de marzo de 2018, Dr. Alex Alajo Agente Fiscal y Ab. Diego león (sic) Rojas secretario de fiscalía.”.

7.14 A foja 77, consta el Oficio FGE-DTH-2019-004168-O, de 30 de julio de 2019, firmado electrónicamente por el abogado Jonathan Francisco García Cañarte, Director de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, en el cual detalló lo siguiente: “En atención su oficio [...] mediante el cual solicita ‘... una certificación detallada en la que conste los nombre con las designaciones respectivas de los servidores que han laborado en la Fiscalía de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana, a partir del mes de noviembre del año 2014, hasta la presente fecha ...’”.

NOMBRE DEL SERVIDOR	MOTIVO	CARGO	DESDE	HASTA
CHIMARRO LAMAR RAUL (sic) ERNESTO	NOMBRAMIENTO O PROVISIONAL	AGENTE FISCAL	10/06/2011	25/10/2017
CHIMARRO LAMAR RAUL (sic) ERNESTO	DESTITUCIÓN	AGENTE FISCAL	10/06/2011	25/10/2017
LEON (sic) ROJAS DIEGO FRANCISCO	ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	SECRETARIO DE FISCALIA (sic)	06/04/2015	NUEVA DISPOSICIÓN

LEON (sic) ROJAS DIEGO FRANCISCO	DAR POR TERMINADO ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	SECRETARIO DE FISCALIA (sic)	06/04/2015	01/04/2019
-------------------------------------	--	------------------------------------	------------	------------

7.15 De fojas 196 a 197 consta la versión libre y voluntaria rendida el 17 de octubre de 2019, por la abogada Maryelisa del Pilar Aldáz Moyano, Secretaria de Fiscales del cantón Francisco de Orellana, quien manifiesta: “[...] Con fecha 1 de diciembre de 2014, ingrese (sic) en calidad se (sic) Secretaria de Fiscales a al (sic) Fiscalía Provincial de Orellana, en la cual mediante acción de personal No. 0941-DTH-FGE, de fecha 26 de marzo de 2015, se me designa como apoyo jurídico de la Fiscalía Especializada de Adolescentes infractores de Orellana, misma que regía desde la fecha 7 de enero de 2015, luego con acción de personal No. 014-FPO-TH, me hacen cargo de la secretaria de adolescentes infractores misma que dice regir desde el 3 de febrero de 2015, esto es hasta que la fiscalía general del estado nos asigne a los nuevos secretarios las funciones dentro de cada una de las fiscalías, en la cual estuve hasta el 31 de mayo de 2015, y luego con acción de personal No. 1687-DTH-FGE, de fecha 1 de junio de 2015 me llega la notificación con el cargo de Secretaria de fiscales en la Fiscalía No. 2 del Cantón Francisco de Orellana, misma que regía desde mi notificación con la antes mencionada acción de personal, en el tiempo en el que me encontraba como apoyo y como Secretaria de la Fiscalía de Adolescentes infractores, nunca tuve contacto físico ni verbal con la representante legal o la víctima de la investigación Previa No. 220101814110005, de lo que yo recuerdo la secretaria o el Secretario anterior nunca me entrego el archivo de adolescentes infractores lo que me dedique hacer estrictamente durante el tiempo que estuve como apoyo Jurídico y secretaria de la fiscalía de Adolescentes Infractores es despachar las instrucciones Fiscales, las investigaciones previas que llegaban a mi conocimiento y lo que me disponía el señor Fiscal Dr. Raúl Chimarro Lamar, que en aquel tiempo se desempeñaba como Fiscal de Adolescentes Infractores, indico además que estuve 4 meses dentro de la fiscalía de adolescentes infractores desde el mes de junio de 2015, asumí la secretaria el Ab Francisco León, indico también que dentro de la citada investigación previa yo no he realizado despacho alguno durante el tiempo que me encontraba como secretaria. [...] 2.- ¿Diga la versionista el nombre del servidor que se encontraba a cargo del Expediente Fiscal No. 220101814110005, (causa No. 22201-2018-00155), por delito de violación? Rspta. No recuerdo. 3.-¿Indique la versionista quién era el servidor encargado del despacho de los expedientes fiscales en especial los de la Fiscalía de Adolescentes Infractores del Cantón Fco. de Orellana, durante las fechas que usted estaba encargada en calidad de secretaria? Rspta. El secretario y el Fiscal de ese entonces de acuerdo a las directrices de la fiscalía General del estado. 4.- ¿Indique el versionista que Fiscal conocía del proceso que no ocupa en este expediente administrativo? Rspta. Desde que yo asumí como apoyo jurídico y secretaria de la fiscalía de Adolescentes infractores y hasta el 1 de junio de 2015 en la cual me encontraba en funciones encontraba como fiscal el Dr. Raúl Chimarro Lamar [...].

7.16 De fojas 202 a 204 consta la versión libre y voluntaria rendida el 18 de octubre de 2019, por el doctor Raúl Chimarro Lamar, ex Fiscal de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana, quien: “[...] A las preguntas realizadas por el Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana, responde: 1.- ¿Indique el versionista la fecha en la que se encontraba a cargo de la Fiscalía de Adolescentes Infractores del Cantón Fco. de Orellana? Rspta. Desde el 10 de junio de 2011. 2.- Indique el versionista con qué fecha conoció el Expediente fiscal No. 220101814110005, por delito de violación? Rspta. El 6 de noviembre de 2014. 3.- ¿Indique el versionista si usted en calidad de Agente Fiscal, se encontraba a cargo de sustanciar el Expediente fiscal No. 220101814110005, por delito de violación? Rspta. Sí, y ordenaba a los secretarios ya

sean titulares o encargados en primer lugar que todos los días revisen y despachen en primer lugar los delitos sexuales que se encontraban en el escritorio del secretario, puesto que el secretario era encargado del custodio del expediente fiscal. 4.- ¿Diga el versionista el nombre del servidor que puso en su conocimiento el Expediente fiscal No. 220101814110005, por delito de violación? Rspta. La Ab. Shirley Suqui Yauripoma el 6 de noviembre de 2014, y se le entrego (sic) inmediatamente al secretario titular para que despache y realice todas diligencias necesarias en este proceso y el secretario era el Ab. Diego Francios León Rojas, como custodio del expediente. 5.- ¿Diga el versionista el nombre del servidor, secretario y/o asistente, que se encontraba a cargo del Expediente fiscal No. 220101814110005, por delito de violación? Rspta. Diego Francisco León Rojas como secretario Titular de la Fiscalía de Adolescentes Infractores de Orellana. 6.- Indique el versionista si se dispuso a algún servidor, secretario y/o asistente, que se despache el Expediente fiscal No. 220101814110005, por delito de violación? Rspta. Ya está contestada anteriormente. 7.- Indique el versionista si conoce los motivos por los cuales no se despachó de forma oportuna Expediente fiscal No. 220101814110005, (causa No. 22201-2018-00155), por delito de violación? Rspta. Al entregar el expediente fiscal No. 220101814110005, Inmediatamente al secretario Diego Francisco León Rojas este retardó sin tener yo conocimiento de cual fuese el motivo [...]”.

7.17 A foja 236 consta el Oficio FGE-CGGR-DTH-2019-006010-O, de 28 de octubre de 2019, firmado electrónicamente por el abogado Jonathan Francisco García Cañarte, Director de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado en el cual informó que el doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar prestó sus servicios en la Fiscalía General del Estado, en calidad de Fiscal de Adolescentes Infractores de la Fiscalía Provincial de Orellana, a partir del 10 de junio de 2011, hasta el 25 de octubre de 2017, fecha en la cual se ejecutó la destitución dispuesta por el Consejo de la Judicatura.

8. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

El presente sumario disciplinario, tiene como antecedente el Oficio 22201-2018-00155-OFICIO-00239-209, suscrito por la abogada Marlene Orejuela Romero, Secretaria Relatora de la Corte Provincial de Justicia de Orellana, mediante el cual remitió copia certificada de la sentencia dictada por los Jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Orellana, el 27 de junio de 2019, dentro del proceso de Adolescente Infractor 22201-2018-00155, en el que se declaró la prescripción del ejercicio de la acción penal, en los siguientes términos: “[...] *RESUELVE desechar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía; consiguientemente se confirma el auto de declaratoria de prescripción del ejercicio de la acción penal. Hágase conocer al Señor Director Provincial de Consejo de la Judicatura de Orellana, la falta de acción que permitió la prescripción de la acción, generando la impunidad de un delito sexual denunciado en perjuicio de una adolescente.*”.

Por el hecho narrado se inició una investigación en la que al concluir, se recomendó el inicio de un sumario disciplinario en contra del doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar y abogado Diego Francisco León Rojas, por sus actuaciones como Agente Fiscal del cantón Francisco de Orellana (Adolescentes Infractores) y Secretario de la Fiscalía de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana, respectivamente.

El 3 de septiembre de 2019, se dictó el auto de inicio en contra de los servidores judiciales por las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 108 numeral 8 y 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.

No obstante, es preciso recordar conforme lo señalado en el punto 3.1 de la presente resolución, que en Sentencia 3-19-CN/20, de 29 de julio de 2020, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, se declaró la inconstitucionalidad de la actuación de oficio del Consejo de la Judicatura prevista en el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial, exclusivamente para la aplicación del artículo 109 numeral 7 ibíd; por cuanto, a criterio del máximo órgano de control constitucional la actuación de oficio del Consejo de la Judicatura por dicha infracción disciplinaria “[...] *atenta al principio constitucional de independencia judicial, [...] interna, al permitir una indebida injerencia en las causas de un órgano de gestión y administrativo sobre actuaciones jurisdiccionales. Esta injerencia supone, a su vez, un inaceptable condicionamiento a las actuaciones judiciales de jueces y juezas, fiscales y defensores públicos, lo cual no solo viola el derecho a un juez independiente, sino que pone en grave riesgo a los derechos que los jueces y juezas deben tutelar [...]*”.

Asimismo, en Resolución 13-2020, la Corte Nacional de Justicia de 18 de noviembre de 2020, resolvió que la o el Presidente de la Corte Nacional de Justicia y las o los Presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia inadmitirán “*liminariamente*” las peticiones de declaración jurisdiccional previa remitidas por el Consejo de la Judicatura dentro de los expedientes disciplinarios iniciados de oficio por las infracciones contenidas en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, por falta de competencia del órgano administrativo; razón por la cual, por dicha infracción disciplinaria, no se realizará ningún análisis.

8.1 Respecto a las actuaciones del doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar (Fiscal):

Del acervo probatorio se tiene que el 4 de noviembre de 2014, la señora GCAC, presentó una denuncia en la que señaló que su hija fue víctima de un presunto delito sexual por parte de su primo. Como fecha del incidente consta: el “*28 de septiembre de 2014*”.

Mediante oficio de 22 de julio de 2019, el ingeniero Joan Calderón Sosa, Analista Provincial de Talento Humano de la Fiscalía Provincial de Orellana, remitió los nombres de los servidores que han laborado en la Fiscalía de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana, a partir del mes de noviembre del año dos mil catorce, hasta la presente fecha; dentro de los cuales constan los nombres de los hoy sumariados. Esta información es corroborada con el Oficio FGE-CGGR-DTH-2019-006010-O, con el cual el abogado Jonathan García Cañarte, Director de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado, detalló que el doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar, Agente Fiscal, estuvo en el cargo desde el 10 de junio de 2011 hasta el 25 de octubre de 2017, fechas estas que son comprobadas mediante las acciones de personal que se han adjuntado en las cuales consta cuando fue nombrado y cuando se ejecutó la sanción de destitución.

Por otra parte, con el Oficio FPO-GPP-2019-000971-O, de 25 de julio de 2019, emitido por el abogado Ángel Uribe Verduga Pinargote, Analista Provincial de Gestión Procesal 2, de la Fiscalía Provincial de Orellana, se observa que dentro del expediente fiscal 220101814110005, la investigación previa de la Noticia del delito se inició el 6 de noviembre del año 2014 a las 11h00 y los impulsos fiscales que se realizaron por el doctor Raúl Chimarro Lamar Agente Fiscal son los siguientes: **1.-** El 6 de noviembre de 2014; **2.-** 29 de marzo de 2017; y, **3.-** 21 de septiembre de 2017.

En este punto es necesario establecer que desde el inicio de la investigación previa 220101814110005; esto es, el 6 de noviembre de 2014, hasta que se retomó la investigación mediante impulso fiscal de 29 de marzo de 2017, trascurrieron dos (2) años cuatro (4) meses y veintitrés (23) días aproximadamente; y desde ese impulso hasta el tercer impulso de 21 de

septiembre de 2017, transcurrieron cuatro (4) meses y veintitrés (23) días aproximadamente; y por último desde ese tercer impulso hasta que fue destituido transcurrieron cinco (5) meses veintitrés (23) días aproximadamente, en el que el Fiscal sumariado estuvo a cargo de dicha investigación, sin que exista la solicitud de formulación de cargos o archivo de la misma.

Ahora bien, como elementos probatorios se ha anexado también, el oficio emitido por el doctor Alex Alajo Panoluisa, del cual se desprende que fue él quien sustituyó al doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar (sumariado) desde el 11 de diciembre de 2017, por lo que en dicho encargo, revisó los expedientes que se tramitaban en esa Fiscalía y que con la finalidad de continuar con la investigación dentro del expediente fiscal 220101814110005, se remitió oficio a la sala de sorteo de la Unidad de la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia del cantón Francisco, con la petición para el señalamiento de día y hora para que se recepte el testimonio anticipado de la víctima.

Seguidamente, el 21 de marzo de 2018, el doctor Alex Alajo Panoluisa, Agente Fiscal, solicitó que se señale día y hora para que se lleve a efecto la audiencia de formulación de cargos dentro del expediente por delito sexual 220101814110005, tramitado en la Fiscalía de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana.

Ante tal pedido, con providencia de 10 de abril de 2018, la abogada Vicenta Cumandá Cuaical Galárraga, Jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Francisco de Orellana, convocó a la audiencia de formulación de cargos para el 13 de abril de 2018, en dicha diligencia la Jueza acogió el pedido de prescripción solicitado por la defensa del adolescente denunciado, y redujo a escrito su decisión el 1 de marzo de 2019, señalando lo que dispone el artículo 334-A del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia esto es: *“Prescripciones. El ejercicio de la acción en los casos de delitos prescribirá en tres años y las contravenciones en treinta días desde su cometimiento.”*

Por tal motivo, el 6 de marzo de 2019, dentro de la causa penal 22201-2018-00155, el doctor Alex Alajo Panoluisa, Agente Fiscal de Adolescentes Infractores, interpuso recurso de apelación de la emisión del auto de resolución de prescripción de 1 de marzo de 2019; por lo que, los Jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Orellana, el 27 de junio de 2019, resolvieron: *“[...] desechar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía; consiguientemente se confirma el auto de declaratoria de prescripción del ejercicio de la acción penal. Hágase conocer al Señor Director Provincial de Consejo de la Judicatura de Orellana, la falta de acción que permitió la prescripción de la acción, generando la impunidad de un delito sexual denunciado en perjuicio de una adolescente.”*

En este sentido, es menester indicar que la administración de justicia constituye un servicio público y como tal debe presentarse de conformidad con los principios establecidos en el Constitución de la República del Ecuador, así como los previstos en la Ley. Es este sentido, el artículo 172 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los servidores judiciales aplicaran el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia.

Hay que entender que, entre otros, el principio de *“debida diligencia”*, debe traducirse en la actuación eficiente de todos los operadores de justicia, el cual impone a las servidoras y los servidores judiciales ejercer el cargo que ostentan con absoluta responsabilidad. Por tal motivo, el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que todas las servidoras y los servidores de la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, función, labor o grado, así como

los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos a su cargo. Serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos.

En el presente caso, se ha podido establecer que el servidor judicial sumariado, tuvo conocimiento de la investigación previa materia del presente sumario disciplinario desde el 6 de noviembre de 2014, fecha en la que se dio inicio a la misma hasta el 25 de octubre de 2017, fecha en la que fue sancionado con destitución, transcurriendo dos (2) años, once (11) meses y veintitrés (23) días; sin embargo durante ese lapso de tiempo únicamente realizó tres (3) impulsos fiscales contando con el inicio de la investigación. El Fiscal sumariado, al asumir conocimiento referente al presunto delito de violación en el que el sospechoso y víctima eran adolescentes, debió prever que el ilícito investigado se había denunciado el 4 de noviembre de 2014, debiendo actuar, con prolijidad pues se debía cumplir con lo dispuesto en los artículos 334 y 334-A del Código de la Niñez y Adolescencia, “Art. 334.- *El ejercicio de la acción. El ejercicio de la acción para el juzgamiento del adolescente corresponde únicamente al fiscal*”; y, “Art. 334-A.- *Prescripciones. El ejercicio de la acción en los casos de delitos prescribirá en tres años y las contravenciones en treinta días desde su cometimiento.*”.

Cabe indicar además que el Fiscal sumariado doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar, inobservó el artículo 315 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prevé: “*Los jueces, fiscales de adolescentes infractores, defensores públicos o privados y la Oficina Técnica de la Administración de Justicia deben impulsar con celeridad las actuaciones judiciales. Quienes retarden indebidamente el proceso seguido contra un adolescente, serán sancionado en la forma prevista en este Código, sin perjuicio de las penas contempladas en otras leyes.*”; por cuanto, estuvo a cargo de la investigación previa 220101814110005, dos (2) años, once (11) meses y veintitrés (23) días, sin haber realizado la solicitud de formulación de cargos.

En mérito de lo analizado, se establece que el Fiscal sumariado, vulneró el principio de celeridad previsto en el artículo 75³ de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 169⁴ y 172⁵ ibíd., por cuanto no cumplió de manera eficiente su deber, afectando con ello la tutela judicial efectiva, falta disciplinaria que se enmarca en la infracción tipificada y sancionada en el numeral 8 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece: “[...] *haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, [...] de la Constitución de la República.*”.

Finalmente, el sumariado en su contestación manifestó que en el sumario se habría cometido una flagrante violación a su derecho a la defensa y al debido proceso, puesto que no se notificó en un correo electrónico y no en persona; ya que la figura que se aplica para conocer el contenido de inicio de un sumario es la citación en persona, por lo que alega la nulidad del procedimiento, al respecto, es necesario mencionar que el artículo 34 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad

³ “Art. 75.- *Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.*”.

⁴ Art. 169.- *El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.*”.

⁵ “Art. 172.- [...] *Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia.*”.

Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, señala: *“De la citación y notificación. Toda citación y notificación a la sumariada o sumariado se hará alternativamente en persona, mediante una sola boleta dejada en su lugar de trabajo o en la dirección electrónica señalada en el expediente de la servidora o servidor.”*; por lo expuesto, no se cometió ninguna violación en la forma de citar y/o notificar al sumariado por cuanto se cumplió con lo establecido en el mentado Reglamento.

Sin embargo, es necesario considerar que la infracción disciplinaria por la cual se aperturó el presente expediente disciplinario, fue la que se encuentra tipificada en el artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo texto es el siguiente: *“Art. 108.- INFRACCIONES GRAVES.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le podrá imponer sanción de suspensión, por las siguientes infracciones: [...] No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la substanciación y resolución de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República [...]”*, misma que se encuentra reformada a través de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 345, de 8 de diciembre de 2020, en cuyo artículo 19, preceptúa: *“Sustitúyase el contenido del artículo 108 por el siguiente [...] ‘Art. 108.- INFRACCIONES GRAVES.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá la sanción de suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por el plazo de hasta treinta días por las siguientes infracciones: [...] 6. No fundamentar debidamente sus actos administrativos o, cuando se haya declarado en vía jurisdiccional que las sentencia o resoluciones han violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República [...]”*; por lo que, la tipificación de la infracción disciplinaria fue modificada tanto en su numeración como en su contenido; puesto que, en el citado artículo 108 numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial (vigente), se indica que para que exista vulneración a los derechos y garantías constitucionales previstos en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador es necesario que preceda una declaratoria jurisdiccional previa y que la vulneración haya sido producida en una sentencia o resolución; presupuestos que se diferencian de los contenidos en el artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, que regía al momento del inicio del sumario disciplinario; puesto que en dicha norma no era necesario una declaratoria jurisdiccional previa y además la vulneración de derechos constitucionales podía producirse en la substanciación y resolución de las causas.

En este contexto, cabe mencionar que en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia es fundamental que se garanticen los derechos y principios constitucionales conforme lo establecen los numerales 3 y 5 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, que instituyen: *“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: [...] 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. [...] 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia [...]”*.

Bajo esta premisa, es pertinente enunciar que entre una de las garantías del derecho al debido proceso se encuentra el principio de favorabilidad, contenido en el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador que en su parte pertinente prescribe: “5. *En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora [...]*”; en este sentido la Corte Constitucional del Ecuador, haciendo referencia a la Sentencia T-824A/02, de la Corte Constitucional Colombiana, indicó que: “*La favorabilidad comporta una garantía esencial del derecho al debido proceso y, como tal, no puede ser desconocida en ningún escenario en el que su aplicación sea necesaria para asegurar la vigencia de un orden justo.*”⁶.

De igual manera, la Corte Constitucional en la Sentencia 270-17-SEP-CC, Caso 1117-12-EP, de 13 de septiembre de 2017, respecto al principio de favorabilidad, señaló que: “*...el principio de favorabilidad no pertenece exclusivamente a la protección de derechos humanos o al beneficio del reo en el derecho penal, por el contrario, la aplicación del artículo 76 numeral 5 es de observancia general en “todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones”. En tal virtud, la aplicación del principio de favorabilidad es obligatoria también en el derecho administrativo sancionador*” (subrayado fuera del texto original).

Por otra parte, el artículo 226 de la Constitución del Ecuador, establece: “*Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución*”; así el principio de legalidad constituye: “*...una regla de comportamiento dirigida a ordenar la conducta de los hombres, y su función no se limita a establecer un conjunto de normas, ante todo, exige que éstas sean respetadas y aplicadas. La norma implica siempre un mandato para algún sujeto y para que este mandato pueda cumplirse deberá ser previamente conocido.*”; en este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador en el caso 0440-11-EP, mediante Sentencia 001-17-SEP-CC, de 11 de enero de 2017, respecto al principio de legalidad señaló: “*...este principio obliga a toda autoridad jurisdiccional al momento de conocer y sustanciar un proceso, en primer lugar a asegurar su competencia conforme a la normativa legal que resulte pertinente para el caso en concreto; y en segundo lugar, una vez asegurada su competencia, el órgano jurisdiccional, debe tramitar la causa conforme al procedimiento legal expresamente reconocido para tal efecto.*”; por consiguiente, si una nueva ley modifica o extingue una acción u omisión como supuestos de infracción disciplinaria, tal conducta deja de ser sancionable.

En este contexto, en el presente caso no existe declaración jurisdiccional expresa en la que se establezca la vulneración de derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador; razón por la cual, no se cumple con el presupuesto establecido en el artículo 108 numeral 6 antes citado, en tal virtud deviene en pertinente el archivo del presente expediente disciplinario.

⁶ Ref. Sentencia No. 2344-19-EP/20 dentro del caso No. No. 2344-19-EP de 24 de junio de 2020.

8.2 Respecto a las actuaciones del abogado Diego Francisco León Rojas (Secretario sumariado):

De la revisión y análisis de las pruebas aportadas al expediente disciplinario se advierte que mediante acción de personal 0388DTHFGE, de 20 de febrero de 2015, la misma que regía a partir del 1 de enero de 2015, se otorgó el nombramiento provisional al abogado Diego Francisco León Rojas, Secretario de Fiscalía Provincial de Orellana.

De la documentación agregada dentro del presente expediente, se vislumbra que el 25 de julio de 2019, el abogado Ángel Uribe Verduga Pinargote, Analista Provincial de Gestión Procesal 2, de la Fiscalía Provincial de Orellana, dio a conocer que dentro del expediente fiscal 220101814110005, figuran los siguientes impulsos fiscales en los que consta el sumariado: **1.-** 29 de marzo de 2017, **2.-** 21 de septiembre de 2017, **3.-** 1 de diciembre de 2017; **4.-** 24 de enero de 2018, **5.-** 8 de marzo de 2018; y, **6.-** 21 de marzo de 2018; por lo señalado se determina que el sumariado estuvo en conocimiento de dicho expediente once (11) meses y veintiún (21) días, en calidad de Secretario.

Ahora bien, la Directriz 023-2012, suscrita por el doctor Marco Navas Arboleda, Director de Gestión Procesal de la Fiscalía General del Estado, la cual contiene el Distributivo de Funciones de Secretarios de Fiscal, Secretarios de Archivo Central Provincial y Asistentes de Fiscal, aplicable al momento procesal que le correspondió actuar al sumariado, abogado Diego Francisco León Rojas, Secretario de la Fiscalía de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana, dentro de la investigación previa por el presunto delito de abuso sexual 220101814110005, materia de este sumario, en las que no consta como su responsabilidad realizar el control de los plazos de duración de las investigaciones previas, ni solicitar la formulación de cargos en el caso de encontrar elementos y por el contrario, de conformidad con el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, el Fiscal es el titular de la investigación preprocesal y procesal, por lo que en armonía con el artículo 444 numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, es atribución de los Fiscales *“Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse del ejercicio público de la acción.”*

En este sentido, el artículo 342 del Código de la Niñez y Adolescencia señala: *“[...] Dentro de los plazos previstos para la investigación, el fiscal solicitará al juzgador competente señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, siempre que existan los elementos suficientes.”*, y no se traslada esta facultad a otro servidor, en consecuencia, al no ser una responsabilidad de funciones de la Secretaría o de Asistente de Fiscalía, realizar el control de los plazos previstos en la normativa, ya que puede ser decisión del Fiscal que de no encontrar méritos para formular cargos, archivar la causa, decisión que sólo se encuentra en la esfera de sus facultades.

Consecuentemente, al observarse que no existe responsabilidad de parte del abogado Diego Francisco León Rojas, Secretario de la Fiscalía de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana, en la sustanciación de la investigación 220101814110005, y de acuerdo al artículo 76

numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador⁷, en concordancia con el artículo 116 del Código Orgánico de la Función Judicial⁸, resultaría procedente ratificar su estado de inocencia.

9. ANÁLISIS DE REINCIDENCIA

De las certificaciones conferidas el 29 de enero de 2021, por la Secretaria encargada de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, se observa que:

- El abogado Diego Francisco León Rojas, no registra sanciones impuestas por la Dirección General y/o el Pleno del Consejo de la Judicatura.

- El doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar, en calidad de Fiscal registra la sanción de destitución del cargo por ser responsable de la infracción establecida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto dentro de la indagación previa 220101813080128, por el presunto delito de violación en el que el sospechoso era un adolescente, el Fiscal sumariado al no haber dado inicio a la acción penal dentro del tiempo que establecía la ley originando que esta prescriba; de conformidad con la Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura de 12 de octubre de 2017, emitida en el expediente MOT-0251-SNCD-2017-LR (0002-2017).

10. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de las consideraciones expuestas, **EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES** resuelve:

10.1 De los recaudos procesales y de las pruebas aportadas una vez que se ha dado cumplimiento al debido proceso se determina que la conducta del sumariado doctor Raúl Ernesto Chimarro Lamar, como Agente Fiscal del cantón Francisco de Orellana (Adolescentes Infractores) se adecuaba a la infracción establecida en el artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuya infracción se sancionaba con suspensión sin goce de remuneración.

10.2 Según lo manda el artículo 76 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, en virtud de la reforma al artículo 108 numeral 8 del Código Orgánico de la Función Judicial vigente al momento del inicio del sumario disciplinario, mismo que fue modificado por el actual 108 numeral 6 *ibíd.*, es pertinente aplicar el principio de favorabilidad en beneficio del sumariado en virtud de que no existe declaratoria jurisdiccional expresa sobre la existencia de vulneración de los derechos y garantías constitucionales establecidos en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador; en consecuencia no es factible imponer la sanción antes referida.

10.3 Ratificar el estado de inocencia del abogado Diego Francisco León Rojas, por sus actuaciones como Secretario de la Fiscalía de Adolescentes Infractores del cantón Francisco de Orellana.

⁷ “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: [...] 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.”.

⁸ “Art. 116.- Trámite. [...] En los sumarios disciplinarios se observarán las garantías del derecho de defensa y las demás del debido proceso consagradas en la Constitución. A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le presumirá inocente mientras no se declare, por resolución firme, su responsabilidad disciplinaria.”.

10.4 Disponer el archivo del presente expediente por la presunta infracción disciplinaria establecida en el numeral 7 del artículo 109 en virtud de la Sentencia 3-19 CN/20, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador y de la Resolución 013-2020, de la Corte Nacional de Justicia.

10.5 Actúe la Secretaría de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario

Notifíquese y cúmplase.

Dra. María del Carmen Maldonado Sánchez
Presidenta del Consejo de la Judicatura

Dr. Fausto Roberto Murillo Fierro
Vocal del Consejo de la Judicatura

Dr. Juan José Morillo Velasco
Vocal del Consejo de la Judicatura

Dra. Ruth Maribel Barreno Velin
Vocal del Consejo de la Judicatura

CERTIFICO: que en sesión de 11 de febrero de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura, por unanimidad de los presentes, aprobó esta resolución.

Mgs. María Auxiliadora Zamora Barberán
**Secretaria General
del Consejo de la Judicatura**